

UNIONES DE HECHO Y PRINCIPIO DE IGUALDAD. ALGUNAS CUESTIONES CONFLICTIVAS

JOSÉ MARÍA BIEDMA FERRER

Profesor Doctor de la UNED en Cádiz

Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Universidad de Cádiz

Resumen: En el presente trabajo se aborda la problemática de las uniones de hecho, derivada de dos situaciones: la inexistencia de una norma estatal común que las regule, y de la proliferación normativa, con mayor o menor precisión, de las Comunidades Autónomas. Dicho análisis se realiza desde la perspectiva del principio constitucional de igualdad. Además, se estudian distintos aspectos conflictivos en el ámbito patrimonial que afectan a las parejas de hecho y que pueden llegar contravenir el principio de igualdad, por cuanto se tratan de distinta forma según la Comunidad Autónoma que lo regule o, en su defecto, del Derecho Común aplicable.

Palabras clave: Unión de hecho, principio de igualdad, Derecho Común, Comunidades Autónomas.

Abstract: This work is an approach to the facto partnerships problematic, which comes from two situations: Non-existence of regulations to control them by the government, and the Self-Governing Communities regulations, which are different in each ones. This problematic is analyzed from the equality constitutional principle perspective, because these facto partnerships could be affected in the sense of patrimonial aspects, depending on the Self-Governing Community or otherwise, in the Common law where they are applied.

Keywords: Facto partnerships, Equality principle, Common law, Self-Governing Community

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES GENERALES. II. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y UNIÓN DE HECHO. 1. Concepto de unión de hecho. 2. Regulación de las uniones de hecho. 3. Sobre la conveniencia de una norma estatal reguladora de las uniones de hecho. 4. Diversidad de normas aplicables en las Comunidades Autónomas y principio de igualdad. III. ALGUNOS ASPECTOS CONFLICTIVOS ACERCA DE LAS UNIONES DE HECHO. 1. El problema de los registros de las uniones de hecho. 2. Los pactos tras el cese de la convivencia en las parejas de hecho: 2.1. Desde el punto de vista general. 2.2. Desde el punto de vista autonómico. 3. Los pactos sucesorios. 4. El conflicto de la atribución del uso de la vivienda familiar. IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. V. BIBLIOGRAFÍA.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

La crisis institucional del matrimonio en los últimos años conlleva de sí un incremento del número de uniones de hecho. Cada vez es mas numeroso el colectivo de personas que no desean contraer matrimonio y optan por la mera convivencia de hecho. Estas uniones, tanto heterosexuales como homosexuales, al

realizar actos jurídicos provocan una serie de consecuencias a las que debe dar el ordenamiento una respuesta adecuada y ajustada a Derecho. Con este trabajo se pretende reflexionar acerca de si esta situación entra en contradicción con el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de nuestro Texto Fundamental.

Si bien es cierto que las parejas que han optado por convivir con otra persona sin ataduras ni compromisos de tipo matrimonial, no se encuentran en condiciones de exigir unos derechos y deberes idénticos a los del matrimonio, ello no es excusa para que el legislador articule los mecanismos legales pertinentes para que este colectivo, cada vez más numeroso, cuente con una regulación que garantice mayor seguridad jurídica.

Ante un conflicto jurídico, la situación jurídica actual del colectivo formado por las uniones de ellos puede encontrarse en distinta situación según donde se ubique geográficamente. Determinadas cuestiones aparecen reguladas por la normativa autonómica aplicable, otras se someten al Derecho Común; también surgen conflictos interregionales por la aplicación de leyes autonómicas, etc.

Partiendo de la base de que las uniones de hecho, como realidad evidente en nuestra sociedad, deben recibir protección jurídica, económica y social, parece conveniente reflexionar acerca de la forma más idónea de proteger esta figura y de algunos aspectos que o bien no están regulados en las normativas autonómicas de igual forma, o simplemente no están regulados.

Como una de las posibles soluciones se aborda la posibilidad de que el legislador elabore una ley estatal, una ley de mínimos, que sienta las bases en esta materia y evite situaciones de desigualdad e inseguridad en algunos casos.

Finalmente, se abordan algunas cuestiones, referidas al ámbito patrimonial de las parejas de hecho que tiene un tratamiento desigual con relación a aquellos que se encuentran unidos por el vínculo del matrimonio.

II. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y UNIÓN DE HECHO

Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo de este principio, consideramos oportuno mencionar algunos datos generales que sirvan para centrar el tema.

Aunque el derecho a la igualdad de los españoles aparece recogido en el artículo 14 de la CE, este artículo se debe conectar con los artículos 1.1 y 9.2 de nuestro Texto Fundamental.

Como es bien sabido el artículo 1.1 de la CE establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

El principio de igualdad se puede estudiar como valor recogido en el artículo 1.1 de nuestro Texto Fundamental. En cuanto que valor superior podemos considerar está recogido en nuestra Constitución en el artículo 14.

El Tribunal Constitucional, con relación al artículo 9.2 de la Constitución, ha declarado que es un precepto que compromete la acción de los poderes

públicos, a fin de que pueda alcanzarse la igualdad sustancial entre los individuos, con independencia de su situación social¹.

Unificar un concepto doctrinal sobre igualdad es tarea ardua y compleja, que excede el interés de este trabajo, pues nos encontramos con distintas definiciones. Pérez Luño entiende que la igualdad ha sido una de las categorías más invocadas y utilizadas en nuestra incipiente experiencia jurídico-constitucional². El término igualdad se caracteriza, entre otros rasgos, por ser de difícil delimitación³, excesivamente vago⁴ e incompleto⁵.

El Tribunal Constitucional ha reconocido que el principio de igualdad no tiene que implicar necesariamente que se encuentre prohibida la existencia de situaciones desiguales, siempre que éstas se encuentren justificadas. Como reconoció desde el principio el Tribunal Constitucional, no es suficiente con que la norma establezca una desigualdad, sino que ésta debe ser irrazonable, no justificada objetivamente⁶.

1. Concepto de unión de hecho

El concepto de unión de hecho es una figura muy heterogénea. Doctrinalmente, cabe destacar la amplia terminología que se emplea para referirse a ella⁷. Siguiendo a LACRUZ BERDEJO la unión de hecho típica se caracterizaría por las siguientes notas: convivencia, estabilidad, disolución informal y libre, y, finalmente, exclusividad de la relación o ausencia en los convivientes de otras situaciones o compromisos semejantes y vigentes⁸.

Las uniones de hecho están referidas a aquellas parejas no casadas que, independientemente de su orientación sexual, conviven de manera estable y duradera, manteniendo una relación de afectividad y realizando una vida en común.

Para determinados autores⁹, si es preciso partir de la base que no hay más remedio que conceder efectos jurídicos a las uniones de hecho, no hay razón para dispersar dichas soluciones por las distintas normas e instituciones de derecho común cuando esos principios ya han sido contemplados por el legislador para el matrimonio.

¹ STC 39/1986, de 31 de marzo.

² PEREZ LUÑO, A. E. (1987): Sobre la igualdad en la Constitución española, *Anuario de Filosofía del Derecho*, IV.

³ DURÁN Y LALAGUNA, P. (1994): «Notas sobre la igualdad» en *Anuario de Filosofía del Derecho* XI, p.233.

⁴ GUISÁN, E. (1987): «Igualdad, imparcialidad y bienestar en la ética contemporánea» en *Anuario de Filosofía del Derecho*, Tomo IV, Madrid, p.10.

⁵ MARTINEZ, J. I. (1991): «El principio de igualdad y la producción de diferencias en el derecho», en AAVV *El principio de igualdad en la Constitución española*, IX Jornadas de Estudio del Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, del Ministerio de Justicia, Madrid, pp. 539 y ss.

⁶ STC 49/1982, de 14 de julio.

⁷ Así, p. por ejemplo, GARCIA HERVÁS, D. (2001): «Panorámica legislativa sobre uniones de hecho» en *IC*, vol. XLI, n.º 81, p. 319 y ss. considera que es «aquella unión que se presenta como alternativa al matrimonio», LLAMAZARES, D (1995): *El sistema matrimonial español. Matrimonio civil, matrimonio religioso y matrimonio de hecho*, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de Madrid, entiende que se trata de «Una unión nacida del consentimiento, que no requiere de un acto formal que le de nacimiento».

⁸ LACRUZ BERDEJO, J. L. (1997): *Elementos de Derecho civil, IV, Derecho de Familia*, Barcelona p. 410.

⁹ REINA, V., MARTINELL, J.M.: *Las uniones matrimoniales de hecho*, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 47.

El hecho de que la Constitución no defina el concepto de unión no deja de ser positivo, a los efectos de dar cabida a diferentes modelos de familia. Entre ellos, el modelo de familia de hecho. Como reconoce acertadamente Pérez Villalobos, el nacimiento de la familia no necesita de un acto formal que la origine¹⁰.

El estudio de la jurisprudencia constitucional pasa por detenernos en dos sentencias del Tribunal Constitucional. De un lado, la STC 184/90, de 15 de noviembre y la STC 222/1992, de 11 de diciembre. Ambas sentencias contienen doctrina contradictoria y contaron con votos particulares. En la primera sentencia el demandante reclama una pensión de viudedad, con motivo del fallecimiento del compañero con el que había convivido durante más de cuarenta años. El cónyuge superviviente pide un trato igualitario basado en el art. 14 CE. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechaza tal petición a quienes decidieron en su día no formalizar la unión de hecho en vínculo matrimonial.

En cambio, en las SSTC 222/1992, 6/93, de 18 de enero y 47/93, de 8 de febrero, el Alto Tribunal considera que la subrogación arrendaticia a favor del inquilino «debe extenderse necesariamente» a las parejas de hecho, considerando inconstitucional al artículo 58.1 de la LAU. La STC 222/1992 ha sido referencia para otros supuestos relacionados, así por ejemplo, entre otras, la SSTC 66/1994, 39/1998 y 47/2001.

La citada STC 222/1992 puede considerarse punto de referencia obligado al estudiar temas relacionados con las formas de matrimonio y con la igualdad de derechos¹¹.

Compartimos la opinión de quienes consideran que parece que el Tribunal Constitucional quiere reconocer a las uniones para determinadas circunstancias y, sin embargo, las niega para otras¹².

El Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de mayo de 1992 entiende como pareja susceptible de reconocimiento de efectos jurídicos a aquella cuya «convivencia *more uxorio*» ha de desarrollarse en régimen convivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal, consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública, con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunal vida amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar». Por su parte, la STS de 4 de junio de 1998 se refiere a la «creación de vínculos familiares a raíz de la convivencia».

Sobre la posible equivalencia entre la unión de hecho y el matrimonio, el TC ha tenido diversas ocasiones de manifestarse sobre ello. La temprana STC 184/1990, al tratar la cuestión de conceder o no una pensión de viudedad al conviviente viudo y no casado, establecía que «... dicha unión libre no es equivalente al matrimonio».

¹⁰ PEREZ VILLALOBOS, M.C. (2008): *Las Leyes autonómicas reguladoras de las parejas de hecho*, Ed. Aranzadi, S.A., p. 101.

¹¹ Op. cit. p. 136.

¹² Op. cit. p. 130.

En nuestra opinión, carece de sentido equiparar matrimonio con unión de hecho. Si una persona desea unirse en matrimonio con otra asume todas las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. Cuando una persona opta por la mera convivencia con otra no esta asumiendo los compromisos legales que del matrimonio se deriva. Ahora bien, desde el momento en que dos personas conviven en pareja, mantienen relaciones con consecuencias jurídicas, y realizan actos y negocios jurídicos, todo ello debe tener un tratamiento legal que proteja las distintas situaciones sobrevenidas y no atenten contra el principio de igualdad.

En aras del cumplimiento del art. 14 de nuestro Texto Fundamental, tan sólo la existencia de una causa que justifique de forma clara y patente una diferencia de trato pueden establecer una diferencia de trato entre una pareja unida por el vínculo matrimonial respecto de otra que no lo está¹³.

2. Regulación de las Uniones de hecho

Ni nuestra Constitución ni el Código Civil (CC en adelante) regulan expresamente la figura de la unión o pareja de hecho. El hecho de que nuestro Texto Fundamental no se ocupe expresamente de esta institución no significa que no tenga cabida en nuestro ordenamiento. El concepto de familia que refleja dicho texto es amplio.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sentido favorable en Sentencia 222/1992, de 11 de diciembre, del Tribunal Constitucional, al afirmar que no puede quedar constreñido el concepto de familia «a la de origen matrimonial, por relevante que sea en nuestra cultura en los valores y en la realidad de los comportamientos sociales esa modalidad de vida familiar. Existen otras junto a ella, como corresponde a una sociedad plural, y ello impide interpretar en tales términos restrictivos una norma como la que se contiene en el art. 39.1, cuyo alcance, por lo demás, ha de ser comprendido a la luz de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del mismo artículo». Por su parte, de modo similar, la Sala Primera del Tribunal Supremo también ha tenido oportunidad de pronunciarse en Sentencia 18 de mayo de 1992, establece que «las uniones libres, aunque estén carentes de normativa precisa, no por eso, son totalmente desconocidas por el ordenamiento jurídico. La C.E. no las prevé, pero tampoco expresamente las interdicta y rechaza y así se desprende de la lectura de su art. 32, en relación con el art. 39, que se proyecta a la protección de la familia en forma genérica, es decir, como núcleo creado tanto por el matrimonio como por la unión de hecho.»

Partiendo de la base de la inexistencia de regulación específica a nivel estatal de este tipo de uniones, BUSTOS GÓMEZ-RICO¹⁴ sintetiza las posibles posturas que podría adoptar el ordenamiento ante esta situación: una primera

¹³ En sentido similar, DE PORRES ORTÍZ DE URBINA, E. (2002), «Uniones de hecho», *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm.14, p. 17.

¹⁴ DE BUSTOS GÓMEZ-RICO, M. (1997): «Las relaciones personales y económicas entre los integrantes de las uniones de hecho y frente a terceros», en *Consecuencias jurídicas de las uniones de hecho*, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, núm. 20.

posición supondría ignorar su existencia; una segunda postura defiende la equiparación de efectos entre matrimonio y pareja de hecho; finalmente, una posición intermedia. Veamos brevemente cada postura:

Los partidarios de la primera postura consideran que, partiendo de la base de que los convivientes no desean mantener ningún vínculo legal, asimilar los efectos de las uniones de hecho a los del matrimonio podría entenderse como un fraude.

En nuestra opinión, esta postura no tiene mucho sentido puesto que el Derecho tiene como misión regular las distintas situaciones que se presentan. Además, desde el punto de vista constitucional infringe el art. 39.1 de nuestro Texto Fundamental que establece que «los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia». La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también avala esta opinión¹⁵.

Los defensores de que el ordenamiento dote a la pareja de hecho de los mismos efectos que tiene el matrimonio favorece notablemente a los que optan por no contraer matrimonio, pero tiene el inconveniente de que desvirtuaría la figura del matrimonio. Es evidente que cuando hablamos de matrimonio y de unión de pareja de hecho estamos hablando de dos realidades jurídicas distintas. Tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo se han pronunciado en contra¹⁶.

Finalmente, cabría una tercera posición intermedia que, reconociendo la existencia de este tipo de uniones no le reconoce los mismos efectos que al matrimonio. Es decir, los partidarios de esta postura consideran que se debe reconocer y proteger jurídicamente a este tipo de uniones. Esta postura nos parece acertada siempre que evite situaciones de desigualdad y discriminación hacia los que libremente han decidido no contraer matrimonio.

En este sentido algunos autores¹⁷, tomando como referencia la STS de 12 de septiembre de 2005¹⁸, plantean la posibilidad de diversos grados de «protección jurídica».

¹⁵ Así, entre otras, la STC 74/1997, de 21 de Abril establece: «Que cuando nuestra Constitución Española en su art. 39.1, proclama que los poderes públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, no constriñe este concepto, en términos exclusivos y excluyentes, a la fundada en el matrimonio, debiendo subsumirse también a la familia de origen no matrimonial (STC 222/1992, de 11 de diciembre)».

¹⁶ Así, la STC 184/1990, de 15 de noviembre. Respecto del Tribunal Supremo, caben mencionar, entre otras, las Sentencias de 27 de marzo de 2001, 17 de enero de 2003 y 12 de septiembre de 2005.

¹⁷ PINTO ANDRADE, C. (2008): *Efectos patrimoniales tras la ruptura de las parejas de hecho*. Ed. Bosch, Barcelona, pp.24-25.

¹⁸ La STS de 12 de septiembre de 2005 establece las siguientes posiciones: «a) Las que tienen como principio la regla general de negar efecto económico alguno a favor de uno de los miembros de la pareja para el caso de ruptura. Los efectos económicos serán únicamente, en su caso, los que los propios miembros de la pareja hayan previsto mediante pacto, con la misma libertad con la que decidieron unirse y con los límites generales del art. 1255 CC. En definitiva, a falta de pacto entre los miembros de la unión, cada uno asume las consecuencias económicas de la ruptura, porque, si libre fue la unión, igualmente libre tiene que ser la ruptura para cualquiera de ellos. Sentando esta doctrina general, se fomentaría con ella la madurez y autorresponsabilidad en la toma de decisiones y se afrontaría una realidad social huyendo de soluciones paternalistas y de principios generales fáciles en su formulación, pero de muy difícil fundamentación constitucional y legal, por no decir francamente inconstitucionales e

Cabría adoptar la posición del reconocimiento jurídico de la pareja de hecho, pero abandonando su regulación al arbitrio de los convivientes, a través de acuerdos y pactos. Esta postura tendría validez, siempre que no se contravengan los límites establecidos en nuestro ordenamiento (como por ejemplo, el art. 1255 CC). En defecto de pacto, la solución de los conflictos exigiría la intervención judicial para dirimirlos. Por otro lado, cabría el establecimiento de una normativa jurídica de Derecho común mínima, sin perjuicio de los pactos que puedan establecer los miembros de las uniones de hecho. A nuestro entender esta última opción sería la más conveniente.

3. Sobre la conveniencia de una norma estatal reguladora de las uniones de hecho

A lo largo de los años se han producido diversas iniciativas políticas, planteadas por distintos grupos políticos, dirigidas a establecer una norma estatal reguladora de las uniones de hecho. No obstante, pese a ello no se ha logrado ningún resultado positivo al respecto¹⁹.

La falta de consenso político, tanto en legislaturas de ideologías de corte socialista como conservadora, ha provocado y animado a que la mayoría de las Comunidades Autónomas de nuestro Estado hayan regulado de diversa forma la normativa aplicable a las parejas de hecho.

La asunción de competencias civiles por parte de las Comunidades Autónomas no ha estado exenta de polémica. En efecto, la controversia se ha suscitado en torno

ilegales. Cuando se afirma como principio general en esta materia el de favorecer al miembro “más desprotegido”, se omite preguntarse: ¿más desprotegido por qué o por quién? Dicho de otra forma, si la “protección” en la que se está pensando es la que brinda el régimen jurídico del matrimonio y este régimen se excluyó consciente y voluntariamente, ¿dónde está la “desprotección” que jurídicamente haya que remediar? b) También hay que tener en cuenta las posiciones que se basan en la anterior postura, pero que, sin embargo, afirman que todo lo antedicho no excluye, evidentemente, el reconocimiento de efectos jurídicos de la ruptura unilateral de las uniones de hecho. Pero serán efectos jurídicos derivados o propios de la institución que en cada caso proceda y no precisamente del matrimonio».

¹⁹ Así, por ejemplo, el grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentaba la “Proposición de ley sobre protección social, económica y jurídica de la pareja” (BOCG, (Congreso de los Diputados) de 12 de septiembre de 1994. Posteriormente, el grupo parlamentario socialista presentó en el Congreso la “Proposición de Ley de reconocimientos de efectos jurídicos a las parejas de hecho” (19 de noviembre de 1994). Cabe decir que esta propuesta no fructificó por la propia inactividad de los proponentes. El 18 de marzo de 1997, con distinta mayoría en el Congreso, el Pleno rechazaba la admisión a trámite de una nueva Proposición de ley, ésta promovida por Izquierda Unida-IC. Ambos grupos parlamentarios volverían a presentar sendas Proposiciones de ley con fecha 2 de abril de 1997 y que fueron rechazadas por el Pleno el 29 de mayo siguiente. En cambio, sí fue admitida a trámite una Proposición de ley presentada por el Grupo parlamentario de Coalición Canaria el 8 de abril del mismo año 1997, e igual favorable suerte corrió, lógicamente, la Proposición de ley orgánica del Grupo parlamentario popular en el Congreso, que fue admitida a trámite el 29 de septiembre de ese mismo año. Lo cierto es que tampoco las dos Proposiciones de ley admitidas finalizaron su tramitación, al quedar relegadas al olvido hasta que finalizó la sexta legislatura. Igualmente, tampoco han sido fructíferas otras cuatro proposiciones de ley sobre esta cuestión que fueron admitidas a trámite por la Mesa del Congreso, respectivamente, el día 25 de abril de 2000, la presentada por el Grupo socialista, el día 8 de mayo de 2000, la del Grupo catalán (Convergencia i Unió) y la del Grupo Federal de Izquierda Unida, ésta última fue corregida el día 22 de mayo de 2000, y el día 29 del mismo mes y año, la del Grupo mixto.

a la constitucionalidad de la asunción de tales competencias, a la posible infracción del principio de igualdad constitucional y a la necesidad de legislar.

Para una parte de la doctrina no es necesaria la regulación estatal. La base de la negación de esta situación se sitúa en el hecho de que la solución para el reconocimiento se sitúa en la aplicación de las normas generales del ordenamiento jurídico, tales como enriquecimiento injusto, comunidad de bienes,... Se trata, en fin, de acudir a la vía jurisprudencial, como la más adecuada, para la resolución de los diversos problemas que se derivan de las uniones de hecho²⁰. Asumir esta solución plantea un doble problema: en primer lugar, al no existir una norma estatal específica y directamente aplicable a las uniones de hecho, supone una mayor inseguridad jurídica; en segundo lugar, la adopción de esta postura, nos debe llevar a reflexionar acerca del hecho de si ello provoca una mayor sobrecarga de trabajo a los ya de por sí saturados Juzgados y Tribunales de nuestro país, con la consiguiente ralentización de las respuestas que se pueden dar a estas situaciones y la casuística generada

En cambio, otro sector de la doctrina justifica la necesidad de intervención estatal en el ámbito de la regulación de las parejas de hecho. La base de este argumento se encuentra en que se produce una situación que como mínimo bordea la inconstitucionalidad, al optar el legislador por una intervención parcial en algunas materias, pero anomia en temas centrales, como pueden ser las consecuencias de la ruptura o los derechos sucesorios del conviviente, así como el rechazo a cualquier tentativa de regulación sistemática y más o menos completa del problema²¹. Para GARCÍA RUBIO²² la situación existente es calificada de «deslealtad constitucional», el legislador podría establecer una ley especial al modo de las Comunidades Autónomas que han legislado sobre el tema. Como alternativa propone, realizar modificaciones sectoriales, tales como relaciones entre convivientes, efectos sucesorios, etc. En nuestra opinión, aun valorando esta aportación, sería más idóneo realizar una ley que contemple los distintos temas antes que segmentar la regulación en función de las distintas situaciones jurídicas existentes que tienen un vacío legislativo. El resultado sería más homogéneo. No obstante, debemos ser conscientes de la dificultad política de lograr el consenso necesario.

La renuencia del legislador estatal contrasta con el definido interés de las Comunidades Autónomas²³. En otras palabras, como el legislador estatal no ha

²⁰ En este sentido, MARTINEZ DE MORENTÍN, M^a. L. (2000): «Las uniones de hecho o la aversión a determinadas normas jurídicas», *Actualidad Civil*, n^o 42, pp.1123-1135, También, CERVERA SOTO, T. (2000): «Breves reflexiones sobre la regulación jurídica de las uniones no matrimoniales», *Revista de Derecho Privado*, (I), Madrid, pp. 1128-1130.

²¹ GARCIA RUBIO, M. P. (2005): «Parejas de hecho y lealtad constitucional» en *Estudios de Derecho Civil: homenaje al profesor Francisco Javier Serrano García*, coord. TORRES GARCIA, Universidad de Valladolid, p. 35-63.

²² Op. cit.

²³ FERNANDO ARRAU, C. (2004): Aspectos patrimoniales en las normativas sobre parejas de hecho. Legislación comparada: España, Francia y Suecia. DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS AÑO XIV, N^o 292, *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones*, abril en http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/estudios_pdf_estudios/nro292.pdf, pág. 4.

abordado el tema que nos ocupa desde una perspectiva global, la mayoría de las Comunidades Autónomas se han lanzado a legislar sobre la materia.

Esta proliferación de la normativa autonómica ha provocado problemas, tales como la excesiva fragmentación legislativa en materia de uniones de hecho y los posibles conflictos de aplicación de leyes interregionales.

Actualmente son 15 las Comunidades Autónomas que de una manera más o menos extensa han regulado acerca de las parejas de hecho²⁴. Consecuencia de ello, determinadas Comunidades Autónomas regulan la materia de una forma y otras la realizan de distinta manera y, en otros casos, ni siquiera son objeto de regulación.

La normativa autonómica surgida se ha dedicado a tratar cuestiones particulares, lejos de abordar el tema en su conjunto, careciendo, en consecuencia, de una visión global del tema.

4. Diversidad de normas aplicables en las Comunidades Autónomas y principio de igualdad

El objetivo de este epígrafe es reflexionar acerca de si la existencia de una normativa, dispersa entre las distintas Comunidades que tienen legislación acerca

²⁴ La normativa autonómica actual relativa a Leyes de parejas de hecho y registros es la siguiente: Cataluña, Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja (que será derogada por la ley 25/2010 de 29 de Julio del libro segundo del Código civil de Cataluña relativo a la persona y a la familia); Aragón, Ley 6/ 1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, modificada por la Ley 2/2004, de 3 de mayo y Decreto 203/1999, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro administrativo de parejas estables no casadas; Navarra, Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables y Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres; Castilla-La Mancha, Decreto 124/2000, de 11 de junio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Orden de 08-09-2000, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se desarrolla el Decreto 124/2000, sobre el Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Comunidad Valenciana, Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho y Decreto 61/2002, de 23 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2001, de 6 de abril, de la Generalitat Valenciana, por la que se Regulan las Uniones de Hecho ; Baleares, Ley 18/2001, de 19 de diciembre de Parejas Estables y Decreto 112/2002, de 30 de agosto, mediante el cual se crea un Registro de Parejas Estables de las Islas Baleares y se regula su organización y gestión; Madrid, Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid y Decreto 134/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Uniones de Hecho; Asturias, Ley 4/2002, de 23 de mayo, de parejas estables y Decreto 71/1994, de 29 de septiembre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho; Castilla y León, Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León; Andalucía, Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho y Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho; Canarias, Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias y Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias; Extremadura, Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura y Decreto 35/1997, de 18 de marzo, de creación del Registro de uniones de hecho; País Vasco, Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho y Decreto 124 /2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho; Cantabria, Ley 1/ 2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria; Galicia, Disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, redactada según Ley 10/2007, del día 28 y Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.

de las parejas de hecho, supone una infracción del principio de igualdad regulado en el art. 14 de nuestro Texto Fundamental.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de julio de 2001 ha establecido que la falta de unidad en lo referido al reconocimiento de derechos a las parejas de hecho en las distintas Comunidades Autónomas «... conduciría a establecer dos clases de españoles, según sus Autonomías tuvieran o no dictadas una Ley de Parejas de hecho, pudiendo acudir a dicha normativa específica o tener que debatirse con la anomia general en la materia, lo cual es contrariamente abierto al principio de igualdad jurídica de los españoles, proclamado en el artículo 14 CE».

Sin embargo, el Tribunal Constitucional en Sentencia 37/1981, de 16 de noviembre de 1981 y, posteriormente, en Sentencia 236/2000, de 16 de octubre, entiende que por el mero hecho de existir divergencias entre una legislación civil de una Comunidad Autónoma y el Código Civil no supone en sí misma una vulneración del principio de igualdad. Para este Tribunal la diversidad normativa aplicable a un mismo supuesto derivada de la pluralidad legislativa autonómica no puede ser directamente calificada de inconstitucional y contraria al artículo 14 CE, por el hecho de ser distinta, puesto que esta legislación puede dictarse dentro del sistema de distribución de competencias constitucionalmente previsto.

En nuestra opinión, aun estando de acuerdo con la posición del Tribunal Constitucional, no podemos dejar de tener en cuenta la postura del Tribunal Supremo. Ciertamente, convivimos en un Estado Autonómico que posibilita que existan, en materias asumidas por las Comunidades Autónomas, soluciones legislativas que puedan diferir. Ello entra dentro del desarrollo legislativo normal de cualquier nación que está formada por distintas Comunidades Autónomas, como es nuestro caso. Ahora bien, ello no debe suponer que de la existencia de este panorama de pluralidad legislativa se produzcan situaciones que contravengan el principio de igualdad y existan situaciones discriminatorias.

Respecto a la cuestión de la posible constitucionalidad de las competencias asumidas y la regulación de los posibles conflictos interregionales se puede señalar lo siguiente:

Una parte de la doctrina fundamenta, con acierto, la constitucionalidad de la regulación autonómica en el hecho de que la generalidad de las leyes autonómicas sobre parejas de hecho toma como punto de partida el hecho de que las parejas aun siendo parecidas al matrimonio, en realidad son diferentes.²⁵

En cambio, para otros autores no todas las Comunidades Autónomas que han legislado sobre las uniones de hecho tienen atribuida la competencia en sus Estatutos para hacerlo ni todas tienen Derecho civil propio para conservar, modificar y desarrollar conforme lo establecido en el artículo 149.1.8ª de nuestro Texto Fundamental²⁶.

²⁵ BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R. (2003): «La competencia para legislar sobre las parejas de hecho», en *Derecho Privado y Constitución*, enero-diciembre, p.62.

²⁶ PINTO ANDRADE, C. (2008): *Efectos patrimoniales tras la ruptura ...*, pp. 38-39. Para este autor, el alcance de la competencia de poder legislar para conservar, modificar o desarrollar el derecho civil foral o

¿Cuál sería la solución más apropiada? La respuesta a esta pregunta resulta compleja. Cabría la posibilidad de que el Estado legislase una ley de armonización. Para el Estado supondría el problema de demostrar la atribución de competencias a nivel Constitucional para la elaboración de dicha ley, teniendo que demostrar, al mismo tiempo el interés general de armonización²⁷. ROCA TRIAS considera con escepticismo la posibilidad de que el Tribunal Constitucional estime la existencia del interés general en la armonización²⁸.

III. ALGUNOS ASPECTOS CONFLICTIVOS ACERCA DE LAS UNIONES DE HECHO

Ante la ausencia de normativa estatal, las distintas Comunidades Autónomas han regulado de manera más o menos pormenorizada las uniones de hecho. ORTUÑO MUÑOZ y VEGA SALA se muestran críticos con esta situación porque entienden que en esta regulación autonómica hay un gran trasfondo político que persigue proyectar una imagen progresista y contentar a ciertos grupos sociales, en vez de encauzar jurídicamente el fenómeno social de la pareja de hecho. Consideran que se ha creado una “regulación aristocrática”, puesto que se contemplan sólo a una serie de parejas asépticamente seleccionadas por cada comunidad con distintos criterios²⁹. Aún siendo correcta la crítica esgrimida por estos autores, consideramos positivo la existencia de la regulación autonómica ya que esta regulación es fruto también de la falta de consenso, a nivel estatal, de los principales partidos políticos para sacar adelante una normativa básica sobre las parejas de hecho.

En general, se puede afirmar que la mayoría de las regulaciones autonómicas en materia de uniones de hecho están inspiradas por tres elementos fundamentales: protección de la seguridad jurídica, el fomento de la autonomía de la voluntad y el establecimiento de mecanismos para evitar el enriquecimiento injusto³⁰.

1. El problema de los registros de uniones de hecho

En la actualidad, nos encontramos con registros autonómicos y municipales. Ambos son de carácter administrativo, que facilitan la prueba de la existencia de

especial allí donde exista ha sido desvirtuado, puesto que las Comunidades Autónomas sobre materias civiles que no guardan relación con aquellas facultades, yendo muchísimo más allá, sin que nadie haya puesto freno a estos abusos. Cita como ejemplos, la asimilación de unión de hecho y matrimonio, la atribución de preceptos de cariz completamente estatal.

²⁷ ESPADA MALLORQUÍN, S. (2007): *Los derechos sucesorios de las parejas de hecho*, Ed. Thomson, Pamplona p.125.

²⁸ ROCA TRIAS, E. (2005): «Repensar la pareja de hecho» en *Estudio comparado de la regulación autonómica de las parejas de hecho: soluciones armonizadoras*, Manuales de formación continuada, núm. 28, Escuela Jurídica del Consejo del Poder Judicial, Madrid, pp.430-431.

²⁹ ORTUÑO MUÑOZ, P. y VEGA SALA, F. (2005): «Derecho civil. Constitución de la pareja de hecho» en *Estudio comparado de la regulación autonómica de parejas de hecho: soluciones armonizadoras*, Manuales de Formación Continuada, núm. 28, CGPJ, Madrid, p.92.

³⁰ En el mismo sentido, refiriéndose a la regulación catalana, ROCA TRIAS E. (1999): “El nou Pret català sobre la família”, *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. I, pp.27-30.

la relación de pareja, pero no cumplen la función constitutiva de cambio de estado civil que apareja la inscripción en el Registro Civil.

En este sentido, otras de las deficiencias que se pueden apuntar es el tema de la doble inscripción, por parte de las parejas de hecho, en los registros de varias Comunidades con el fin de beneficiarse de los efectos positivos previstos en ellas. Ello es debido a la inexistencia de una regulación estatal que regule de forma conveniente el ámbito de aplicación de la normativa de cada Comunidad Autónoma. No existen criterios comunes delimitadores ni un Registro de Parejas de Hecho centralizado³¹. Esto aconseja la creación de una norma estatal que regule estos posibles conflictos.

El carácter no constitutivo de los diferentes registros que han sido creados por Comunidades Autónomas y municipios se convierte en un argumento importante para que el legislador estatal intervenga creando el citado Registro de Parejas de Hecho que genere seguridad jurídica, idéntica a la que se produce cuando una pareja unida se une por el vínculo matrimonial o se divorcia.

En unos casos se requiere la vecindad civil (caso de la legislación catalana, Navarra, balear y la remisión del Derecho civil gallego); en otros casos, se exige la vecindad administrativa (legislación de la Comunidad Autónoma Vasca) y, por último, otras leyes se refieren al requisito del empadronamiento (en Extremadura y Valencia se establece el empadronamiento de al menos uno de los dos miembros de la pareja de hecho, salvo el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y Asturias que exige el empadronamiento de los dos miembros). En Andalucía el criterio exigido es la residencia habitual en algún municipio andaluz. En Cantabria y en Madrid no sólo es necesario que uno de los miembros se encuentre empadronado, sino que además se exige la residencia en dicha Comunidad. Con respecto a la señalada determinación unilateral, se puede producir un conflicto de leyes cuando una pareja estable entre una navarra y un catalán se encuentre empadronada en Madrid y sean residentes. Si esta pareja se inscribe en el Registro de la Comunidad de Madrid, les será de aplicación la ley madrileña, pero si se hubiera producido convivencia durante más de dos años, les sería de aplicación la ley catalana, sin que necesitasen inscripción ni declaración alguna; pero, cabe añadir que si han convivido durante más de un año, les sería de aplicación la ley Navarra, sin necesidad de requisitos formales³².

En nuestra opinión esta situación puede provocar inseguridad jurídica. También se ha planteado el problema referido al supuesto en que coexistan diversas normas aplicables a distintos supuestos. El artículo 16 del CC remite al Derecho internacional privado, pero el problema no se resuelve dado que estas normas no tienen ninguna previsión sobre parejas de hecho, estableciendo reglas

³¹ EZQUERRA UBERO, J. J. y LÁZARO GONZALEZ, I. U. (2007): *Las parejas de hecho como sujeto de las políticas familiares en la España de las autonomías*. Informes Economía y Sociedad. Fundación BBVA, p. 75.

³² GÓMEZ CALLE, E. (2003): «La ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid», *Anuario de Derecho Civil*, T. LVI, fascículo II, abril-junio, pp. 419-420.

sólo en relación al matrimonio. Por tanto, surge la duda de si es admisible la aplicación analógica de estas normas a las parejas de hecho.³³

GARCÍA-POSADA GÓMEZ³⁴ critica las regulaciones autonómicas de las uniones de hecho, por cuanto considera que el problema radica en que no han tenido claro la distinción entre «un concepto *institucionalizador* de un modo determinado de convivencia y un concepto simplemente *instrumental* para la tutela de la convivencia de hecho». El primer concepto, mayoritariamente seguido por las Comunidades Autónomas, se corresponde con un modelo contractual que, partiendo de una declaración previa y formalizada, crea un nuevo estatus jurídico. En cambio, el concepto instrumental se corresponde con un modelo de convivencia de hecho en puridad, atribuyendo una serie de efectos a posteriori. En este último caso, es suficiente que la situación de hecho pueda ser calificada de convivencia *more uxorio*³⁵.

2. Los pactos tras el cese de la convivencia en las parejas de hecho: especial referencia a los pactos sucesorios

Tras el cese de la convivencia entre los miembros de las parejas de hecho, cabe la posibilidad de que se hayan realizado pactos. Vamos a estudiar este tema desde el punto de vista general y autonómico.

2.1. Desde el punto de vista general

La legislación común no se ocupa de este tipo de pactos. Sin embargo, la doctrina reconoce de modo general que los pactos entre convivientes deben considerarse válidos y eficaces³⁶. Desde el punto de vista jurisprudencial, el Tribunal Supremo en sentencias de 27 de mayo de 1994 y 11 de octubre de 1994 reconoce la validez de estos pactos³⁷.

Con respecto a los límites. Ya la STS de 27 de mayo de 1998 establecía la libertad de los convivientes para regular los pactos, con respeto a los límites generales del art. 1255 CC. Es decir, que no sean contrarios a las leyes, la moral y al orden público.

³³ ESPADA MALLORQUÍN, S.: *Los derechos sucesorios de las...*, p. 130.

³⁴ GARCÍA POSADA, E.(2003): «El concepto de convivencia no matrimonial en Derecho español», *Anuario de Derecho Civil*, T. LVI, fascículo III, julio-septiembre, pp. 1144-1145.

³⁵ ESPADA MALLORQUÍN, S. (2007): *Los derechos sucesorios de las...*, p.195.

³⁶ Desde el punto de vista doctrinal existe unanimidad en este tema. Así, como recoge PINTO ANDRADE, C. (2008): *Efectos patrimoniales tras la ruptura ...*, p. 49, se pueden destacar entre otros los siguiente autores: Lacruz Berdejo, Estrada Alonso, Gitrama González: Pantaleón Prieto, O'Callaghan Muñoz, Espín Cánovas, Bercovitz, Vidal Martínez, Fosar Belloch, Torres Lana, Zarraluqui, Gallego Domínguez, Rivero Hernández...señalados por MESA MARRERO, C.(2000): *Las uniones de hecho. Análisis de las relaciones económicas y sus efectos*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2000, p.. 102 y por MARTINEZ DE AGUIRRE, C. (2001): «Acuerdos entre convivientes more uxorio» en *Revista de Derecho Privado*. Noviembre p. 843.

³⁷ Con anterioridad, cabe citar las SSTS de 21 de octubre de 1992 y 18 de febrero de 1993, entre otras.

En nuestra opinión, pese a que tanto la doctrina como la jurisprudencia se muestran partidarios de su admisión, de *lege ferenda* sería conveniente que el legislador regulase expresamente este tipo de pactos para los convivientes de hecho, siempre y cuando se respeten los límites antes reseñados.

2.2. Desde el punto de vista autonómico

Todas las Comunidades que han regulado las relaciones de pareja de hecho coinciden en otorgar libertad a los convivientes. No obstante, imponen ciertos límites en la realización de los pactos a los convivientes.

Respecto a la necesidad de documentar estos pactos en escritura pública, la legislación autonómica, en general, apuesta por la libertad de forma. De este modo, tan solo las Comunidades de Cantabria, Aragón, Extremadura, Galicia, Valencia y Madrid exigen que estos pactos se realicen en escritura pública. El caso de Canarias es peculiar. Esta Comunidad sólo establece esta exigencia para el caso de que se señalen compensaciones económicas entre los que conviven.

Es muy común que los acuerdos versen sobre aspectos patrimoniales, tales como el régimen de disposición y uso de la vivienda familiar durante y tras la ruptura de la convivencia, régimen de gastos y cargas de la convivencia, pactos relativos a que régimen se someten durante la convivencia, bien sea de tipo matrimonial, es decir, establecimiento de un tipo de régimen económico: gananciales, separación de bienes, regímenes forales, etc.; o bien, de tipo patrimonial general, es decir, comunidad de bienes, sociedad civil, fijación de pensión alimenticia a favor de convivientes o de hijos comunes durante la convivencia o tras la ruptura en las condiciones que se hayan pactado, fijación de una indemnización o compensación tras la ruptura a favor de uno de los convivientes, donaciones entre convivientes y pactos sucesorios.

Al hilo del tema que nos ocupa, planteamos la cuestión de si es posible que las uniones de hecho se puedan someter mediante pacto a las normas de la sociedad de gananciales. Este asunto ha sido planteado tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial.

Desde el punto de vista doctrinal, la mayoría de los autores son partidarios de la admisión de dicho pacto a la sociedad de gananciales. Dicha postura se argumenta tomando como base la libertad de pactos y la autonomía de la voluntad. Dentro de los autores que son partidarios podemos hacer una doble visión: por un lado, aquéllos autores que consideran que tal posibilidad es lícita sin que exista impedimento al respecto³⁸. Por otro lado, nos encontramos con otro

³⁸ Entre otros, MERINO GUTIÉRREZ, A.(1988): «Las uniones libres y su perspectiva actual (las parejas no casadas)», *La Ley*, 1988-1, p. 1011; MERINO HERNÁNDEZ, J. L.(2000), *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, dtres. Manuel Albadalejo y Silvia, T XXIII, vol. I, Edersa, Madrid, 2ª Ed. pp.697-699; ROCA TRIAS, E. (1995): «El régimen económico de las parejas de hecho», en *Las uniones de hecho*, coord. Mª Paz Sánchez González, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz-Departamento de la Mujer del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Cádiz, p. 38.

grupo de autores que considera viable la posibilidad de establecer dichos pactos pero cuestionan su eficacia frente a terceros³⁹.

Frente a estos autores, nos encontramos a otro grupo que se opone a la citada posibilidad, básicamente porque entienden que los regímenes patrimoniales presuponen ya de por sí la existencia del matrimonio⁴⁰.

La posición de la jurisprudencia se muestra a favor de la admisión de dicho acto. Así, la STS de 18 de mayo de 1992 estima que no debe rechazarse de plano «la posible aplicabilidad de la normativa que disciplina el régimen ganancial matrimonial si expresamente se pacta». Por su parte la STS de 21 de octubre de 1992 abunda más en el tema señalando que: «la normativa reguladora del régimen económico matrimonial no puede considerarse automáticamente aplicable a toda unión libre por el mero hecho del surgimiento de la misma, ello sin perjuicio de que atendidas las circunstancias de cada caso concreto, pueda predicarse la aplicabilidad (no por ‘analogía legis’, que aquí no se da, sino por ‘analogía iuris’) de algún determinado régimen económico de los diversos que para el matrimonio regula el citado Título del Código Civil, siempre que quede patentizado por pacto expreso o tácito (deducido éste de sus hechos concluyentes e inequívocos) que la voluntad de los convivientes fue someterse al mismo». De la lectura de esta última Sentencia se observa que el Tribunal Supremo también admite el pacto tácito.

En nuestra opinión, aún reconociendo la evidencia de que el matrimonio y las uniones de hecho son dos realidades que no pueden ser equiparadas de manera absoluta, ello no impide que las partes puedan pactar libremente la regulación de sus relaciones patrimoniales por las reglas de la sociedad de gananciales.

Otra cuestión que resulta interesante tratar es el relativa a los efectos que se producen cuando no hay pacto ya sea expreso o tácito tras la ruptura de la pareja.

Siguiendo a PINTO ANDRADE⁴¹, podemos distinguir entre aquellas parejas de hecho que se encuentran sometidas a la normativa autonómica específica que reconoce legalmente el derecho a pensión, compensación o indemnización y las parejas sometidas a la normativa civil común.

En el primer caso, se encontrarían, por un lado, los supuestos de cualquier pareja de hecho con vecindad en Cataluña y Navarra, ya se encuentren inscritas o no en el Registro; por otro lado, también los casos de Aragón, Baleares,

³⁹ Entre otros, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (1993): «Las parejas de hecho», *Aranzadi Civil I*, 1993-I, pp.1836-1837; MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C. (1999): «Las uniones de hecho: Derecho aplicable», *Actualidad Civil* 1999-4, p.1107.

⁴⁰ VIDAL MARTÍNEZ, J. (1986): «Aplicación del régimen de sociedad de gananciales a una relación y convivencia no matrimonial. Convenio económico. Validez», *Revista General del Derecho*, núms. 505-506, pp. 4307-4314; TORRES LANA, J. A. (1988): «Relaciones patrimoniales a la conclusión de la convivencia more uxorio», en *Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo*, vol. V, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España- Consejo General del Notariado, Madrid, pp. 782-783, y «De nuevo sobre las relaciones patrimoniales entre parejas no casadas», *Aranzadi Civil*, 1993-II, pp. 2417-2418; CORRAL GIJÓN, M.C. (2001): «Las uniones de hecho y sus efectos patrimoniales (Parte segunda: Efectos patrimoniales)», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 664, p. 563.

⁴¹ PINTO ANDRADE, C.: *Efectos patrimoniales tras la ruptura ...*, pp. 96 y ss.

Cantabria, Extremadura, Galicia, País Vasco, pero en este caso deberán estar debidamente inscritas en los Registros correspondientes.

En el segundo supuesto, es decir, las parejas sometidas a normativa civil común, se pueden distinguir cuatro casos: en primer lugar, las Comunidades de la Rioja y Murcia, que no tienen ley propia; en segundo lugar, aquellas comunidades que no tienen previsto este tipo de prestaciones, salvo pacto expreso. Este sería el caso de las Comunidades de Andalucía, Asturias, Canarias, Madrid, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha; un tercer supuesto sería el de aquellas parejas cuya ruptura se produjo antes de la entrada en vigor de ley autonómica. Este supuesto, a medida que avanza el tiempo desde la aprobación de la ley autonómica es más improbable; finalmente, parejas a las que no se les aplica la correspondiente ley autonómica por exclusión. Este sería el caso de las Comunidades Autónomas que tienen prevista la inscripción en el Registro de forma obligatoria. De este modo, si la pareja no está inscrita se le aplicaría la normativa común. Sería el caso de las Comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia y País Vasco.

3. *Los pactos sucesorios*

Mediante los pactos sucesorios, realizados en escritura pública, se permite que los convivientes de hecho puedan realizar atribuciones de forma gratuita o actos de liberalidad inter vivos que tengan repercusión en el aspecto patrimonial de la unión de hecho cuando se produzca el fallecimiento.

El pacto sucesorio se puede considerar «un peculiarísimo negocio jurídico, el cual propicia la ordenación de la sucesión del de *cuius* mediante un intercambio de voluntades: la del propio causante y la de, al menos, otra persona⁴²».

La coexistencia en nuestro país del ordenamiento de Derecho Civil común con el Derecho Civil Foral y autonómico nos lleva también a realizar un tratamiento diferente en lo que se refiere las uniones de hecho.

a) Desde el punto de vista del Derecho Común

Cuando nos referimos a pactos sucesorios en las parejas de hecho, debemos realizar también una doble distinción entre los que se encuentran sujetos al Derecho Común y los que se encuentran sujetos al Derecho autonómico.

En nuestro Código Civil estos pactos no son posibles, como regla general. El artículo 1271 del CC establece que

⁴² SANCHEZ ARISTI, R. (2003): *Dos alternativas a la sucesión testamentaria: pactos sucesorios y contratos post-mortem*, Colección de Estudios de Derecho Privado, núm. 32, Ed. Comares, Granada, p. 7. Para este autor, si bien es cierto que la definición realizada no queda ajustada al *pactum de hereditate tertii*, en el que ninguno de los intervinientes es el causante de la sucesión, ello no es obstáculo para el carácter igualmente bilateral del mismo.

Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros pactos que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal.

Por otra parte, el art. 635 CC señala que *La donación no podrá comprender los bienes futuros.*

Esta regla general tiene como es sabido una serie de excepciones que se consagran en el artículo 826 CC y 827 CC, referidos a la promesa de mejorar o no mejorar en Capitulaciones y a las mejoras hechas en Capítulos o por contrato oneroso con un tercero, respectivamente, y, finalmente, en el art. 1341 CC que regula la donación por razón de matrimonio.

Concretamente, podemos afirmar que los pactos han quedado reducidos a aquellos pactos que se celebran en capitulaciones matrimoniales. En este punto nos encontramos con una situación de posible desigualdad respecto a las parejas de hecho. En efecto, al exigir la existencia de vínculo matrimonial, las parejas de hecho sometidas a Derecho Común quedan automáticamente excluidas de esta posibilidad.

Ahondando en la cuestión, CERDA GIMENO⁴³ se muestra partidario de una reconsideración de la cuestión porque considera que la normativa se encuentra obsoleta por inadecuación técnica y falta de vigencia social.

Como propuesta de solución a esta imposibilidad de realizar pactos sucesorios compartimos la que realiza ESPADA MALLORQUÍN, que básicamente consiste en suprimir el requisito de la existencia de vínculo matrimonial, partiendo de la existencia de una convivencia *more uxorio* y que dichos pactos se formalicen en escritura pública⁴⁴.

b) Desde el punto de vista del derecho civil foral y autonómico

En el Derecho foral y civil autonómico la regla del derecho Común se invierte, es decir, se permiten con ciertos requisitos realizar dichos pactos. Es requisito común la necesidad de celebrarse mediante escritura pública.

El derecho foral de Aragón regula los pactos sucesorios en la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte. De conformidad con el art. 63 de dicha Ley, para el otorgamiento válido de pactos sucesorios se configura como único requisito el de la mayoría de edad. Por su parte, el art. 16 de la Ley aragonesa de parejas estables viene a reiterar lo ya establecido. De modo similar, La Ley 1/173, de 1 de marzo por la que se aprueba la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra establece como único requisito para otorgar pactos sucesorios la mayoría de edad.

También se admiten en las legislaciones de Vizcaya (art. 74 del Fuero de Vizcaya) y Guipuzcoa (arts. 179-188). En el caso guipuzcoano el otorgamiento

⁴³ CERDA GIMENO, J. (2009): *Pactos sucesorios. Del porqué de su prohibición y su aplicación en la práctica*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, p. 445.

⁴⁴ ESPADA MALLORQUÍN, S.: *Los derechos sucesorios de las...*, p. 471.

de pactos queda limitado a la ordenación sucesoria del caserío y sus pertenencias. En el caso del Fuero de Ayala no se contempla de manera expresa la posibilidad de realizar pactos sucesorios.

Finalmente, en el caso de Formentera e Ibiza son permitidos dichos pactos y no se establecen requisitos subjetivos especiales (art. 72 Compilación balear). En cambio, en Mallorca y Menorca sólo se permiten los llamados pactos de definición (arts. 50-51 de la Compilación balear)⁴⁵.

En Cataluña no cabe la idea de pacto sucesorio en la pareja de hecho. En cambio, si es posible la sucesión contractual a través de los heredamientos. Están regulados en el Código de Sucesiones de Cataluña (arts. 71 a 89 y 90 a 98). Los heredamientos son acuerdos o pactos, obligatoriamente realizados en capitulaciones matrimoniales.

Finalmente, en Galicia se admiten los pactos sucesorios en el caso de las parejas de hecho. Los pactos sucesorios son contemplados en la Ley 2/2006, están contemplados para el cónyuge y para los descendientes, pero la Disposición adicional tercera de dicha ley se establece la equiparación al matrimonio de las relaciones maritales mantenidas con vocación de permanencia. De ello se puede deducir que los pactos sucesorios están permitidos en la misma medida que para los matrimonios.

4. El conflicto de la atribución del uso de la vivienda familiar

La atribución del uso de la vivienda familiar supone una reclamación habitual entre ex convivientes. La situación varía en función de la existencia o no de pacto y, en defecto de éste, se debe abordar el tema en base a la existencia o no de descendencia común.

La existencia de pacto por el cual se atribuye la vivienda a uno de los miembros de la pareja de hecho no plantea problemas y es aceptado por la doctrina⁴⁶. La jurisprudencia también ha admitido esta posibilidad⁴⁷.

Para el supuesto de inexistencia de pacto, debemos contemplar dos situaciones: la existencia o no de descendencia común.

⁴⁵ Los pactos de definición son aquellos a través de los cuales los descendientes, legitimarios y emancipados pueden renunciar a los derechos sucesorios o, de forma exclusiva, a la legítima que en su día le pudiera corresponder.

⁴⁶ Entre otros, GAVIDIA SANCHEZ, J. V. (1999): «¿Es la unión libre una situación análoga al matrimonio?», *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 32, p.339; LÓPEZ AZCONA, A. (2002): *Aspectos jurídicos de las rupturas de las parejas de hecho*, Ed. Aranzadi, Pamplona, p.213; DEL OLMO GARRIDO, N.(2000): «La atribución judicial de la vivienda familiar en los supuestos de ruptura de las uniones de hecho», *Revista de Derecho Privado*, Madrid, febrero.

⁴⁷ Así, por ejemplo en la SAP de Madrid de 24 de Abril de 1998 que considera implícito en el desistimiento de la parte actora de su pretensión de continuar en el uso de la vivienda un acuerdo entre ex convivientes de no atribución de la misma. La SAP de Vizcaya de 6 de octubre de 1997 estima válido el acuerdo entre un conviviente y unos terceros, por medio del cual se asigna el uso vitalicio de la vivienda al otro miembro de la pareja..

En el caso de existir descendencia común la jurisprudencia ha mantenido un criterio uniforme en base a la aplicación analógica del art. 96 del CC⁴⁸. De este modo, resulta razonable que la asignación de la vivienda se realice a favor del conviviente que ostenta la guarda y custodia de los hijos menores. Nos encontramos ante una medida en beneficio del interés del menor.

En general, el derecho autonómico no ha previsto nada sobre el destino de la vivienda en la que se ha desarrollado la convivencia, cuando la jurisprudencia más reciente ha adoptado medidas a favor del conviviente más necesitado⁴⁹.

La actual crisis socioeconómica debe hacer reflexionar al legislador para que reforme este artículo en un doble sentido: por un lado mencionando su aplicación expresa a las parejas de hecho, y, por otro lado, integrando la nueva realidad social y económica que padece nuestro país. El automatismo que genera este artículo debería ser sustituido por una mayor discrecionalidad judicial, ateniéndose a las diversas circunstancias económicas, laborales, sociales, etc., en que se encuentren las distintas parejas.

En el caso de la inexistencia de hijos en la unión de hecho, la doctrina también se halla dividida acerca de la aplicación analógica del art. 96 CC. Un sector de la doctrina se muestra claramente en contra de dicha aplicación analógica, por cuanto la atribución de uso de la vivienda, en caso de matrimonios sin hijos, no es una medida de protección de la familia sino una medida derivada del estatuto matrimonial. Producida la separación o el divorcio cesa la convivencia y no existe vínculo familiar entre los cónyuges⁵⁰. Por el contrario, otro sector de la doctrina se muestra partidario de aplicar el art. 96 CC⁵¹.

Con respecto a la jurisprudencia, se puede observar una cierta evolución. Así, por ejemplo las SSTS de 20 de octubre y 30 de diciembre de 1994 fueron contrarias a este tipo de pretensiones, partiendo de la base de considerar improcedente aplicar por analogía la normativa matrimonial a las parejas de hecho. Sin embargo, posteriormente, se ha producido un cambio de criterio. En las Sentencias de 16 de diciembre de 1996 admite la extensión y de 10 de marzo de 1998. La primera de ellas, la Sentencia de 16 de diciembre de 1996, admite la extensión del art. 96.3 CC a las parejas de hecho como excepción a lo que se

⁴⁸ Cabe citar la STS de 16 de noviembre de 1996 y, en el ámbito de la jurisprudencia menor, se pueden citar, entre otras, las siguientes sentencias: la SAP de Córdoba de 29 de abril de 1998, SAP de Huesca de 12 de noviembre de 1998, SAP de Ciudad Real de 15 de marzo de 1999, SAP de Barcelona de 29 de noviembre de 1999, SAP de Murcia de 6 de junio de 2000, SAP de Álava de 8 de marzo de 2001 y SAP de Zaragoza de 7 de marzo de 2002.

⁴⁹ LÓPEZ AZCONA, A.: «Aspectos Jurídicos de las rupturas de las parejas de hecho», Duodécimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, en http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n000991_parejas%20de%20hecho.pdf, p.230

⁵⁰ DE PORRES ORTÍZ DE URBINA, E. (2002): «Uniones de hecho», Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núm.14, p.25. También en contra, entre otros autores, GALLEGO DOMÍNGUEZ, I. (1995): *Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales*, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España-Centro de Estudios Registrales, Madrid, p.292.

⁵¹ Entre otros, DEL OLMO GUARIDO, N. (2000): «La atribución judicial de la vivienda familiar en los supuestos de ruptura de las uniones de hecho», *Revista de Derecho Privado*, Febrero, Madrid, p. 167. C. DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C. (2002): *Uniones de hecho. Una nueva visión después de la publicación de las leyes sobre parejas estables*. Tirant lo Blanch, Monografías, Valencia, p. 263

considera general inaplicación de las reglas matrimoniales. También, resulta interesante destacar la STS de 10 de marzo de 1998 que tiene como base la protección del conviviente perjudicado por la situación de hecho para traer a colación el mencionado precepto del CC.

En lo que se refiere a la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, la SAP de Navarra de 15 de septiembre de 1994 y la SAP de Jaén de 23 de mayo de 1997 rechazan la aplicación analógica. En cambio, las SSAP de Barcelona de 7 de abril de 1998 y de 4 de diciembre de 1998, así como la SAP de Madrid de 22 de junio de 1999, aunque todas ellas rechacen su aplicación al supuesto enjuiciado en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso. Más recientemente, la SAP Barcelona de 8 de marzo de 2005 establece que la mera convivencia como pareja de hecho no otorga título para ocupar la vivienda.

En el tema que nos ocupa se debería legislar, en aras de lograr una mayor seguridad jurídica. En tanto ello no se produzca, se debe realizar aplicación analógica del art. 96 CC en aquéllos supuestos en los que se produzca vulneración de algún derecho fundamental a un conviviente de hecho, de tal modo que resulte seriamente perjudicado. Por ello, reiteramos la idea de que los operadores jurídicos deben tener presente la situación económica, social y laboral de cada momento⁵².

IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Del análisis de la situación podemos llegar a varias conclusiones:

En primer lugar, no se puede obviar el hecho de que la existencia de parejas de hecho es un fenómeno creciente, al que el Derecho tiene que prestar atención y dar una respuesta.

En segundo lugar, la proliferación de la regulación sobre las parejas de hecho en la mayoría de las Comunidades Autónomas es una realidad, debido a causas de índole político. A nivel estatal, no ha habido consenso entre los diversos grupos políticos a lo largo de la historia de nuestra democracia.

En tercer lugar, esta situación ha provocado una fragmentación de la materia. Además, la normativa autonómica que regula las uniones de hecho es incompleta, con importantes carencias.

Esta normativa autonómica no tiene que ser causa, en principio, de creación de situaciones de desigualdad con respecto a las Comunidades Autónoma que no han legislado o no lo han hecho de manera más completa. Pero, con frecuencia, ocurren situaciones que producen desigualdades o discriminaciones. A nivel autonómico, resulta sorprendente que sobre cuestiones patrimoniales apenas se haya legislado.

⁵² VIÑAS MAESTRE, D. (2007): Uniones estables de pareja. Regulación procesal y uso del domicilio. *Revista Indret, Revista para el Análisis del Derecho*, Enero, Barcelona, p. 16. Para esta Magistrado no se debe otorgar el derecho de uso de la vivienda a uno de los miembros convivientes cuando no hay descendencia, salvo en casos muy extremos que supongan la vulneración de los derechos fundamentales.

Ante la falta de normativa común, cuando surgen conflictos se acude a Juzgados y tribunales que, con frecuencia, resuelven aplicando analógicamente el art. 96 del CC, en un intento de asimilar la situación de pareja matrimonial a la de pareja de hecho. Ello supone elevar el nivel de inseguridad jurídica para este colectivo. En la jurisprudencia analizada en este trabajo hemos estudiado situaciones en las que sí se permite la aplicación analógica de este artículo y en otras en las que no.

Por todo ello, recomendamos la elaboración y aprobación de una ley estatal que sirva de mínimo, de base para dar cobertura explícita al colectivo de las uniones de hecho.

La creación de registros a nivel autonómico y municipal para el colectivo puede crear problemas, dado que no tienen un carácter constitutivo. Son meros registros administrativos. Se propone la creación de un Registro Central de Parejas de Hecho que tenga el citado carácter constitutivo.

La creación de una norma estatal supondría dar cobertura a este colectivo en aquellas Comunidades Autónomas en las que no se ha legislado, y, en aquellas que, aun teniendo normativa, ésta resulta incompleta. También, ayudaría a regular los conflictos interregionales que puedan surgir cuando cada miembro de la pareja se encuentre, por ejemplo, empadronado en regiones distintas.

En lo que se refiere a los pactos, deben ser admitidos siempre que no contravengan los límites del ordenamiento. En el caso de los pactos sucesorios, el Derecho Común debe orientarse en la línea del Derecho Foral y admitirlos, por cuanto el impedimento del Derecho Común (salvo excepciones) responde a una situación cronológicamente desfasada.

V. BIBLIOGRAFIA

- BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R. (2003): La competencia para legislar sobre las parejas de hecho, en *Derecho Privado y Constitución*, enero-diciembre.
- «Las parejas de hecho» (1993): *Aranzadi Civil I*.
- CERDA GIMENO, J. (2009): *Pactos sucesorios. Del porqué de su prohibición y su aplicación en la práctica*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.
- CERVERA SOTO, T. (2000): Breves reflexiones sobre la regulación jurídica de las uniones no matrimoniales, *Revista de Derecho Privado*, (I), Madrid.
- CORRAL GIJÓN, M.C. (2001): «Las uniones de hecho y sus efectos patrimoniales (Parte segunda: Efectos patrimoniales)», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 664.
- DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C. (2002): *Uniones de hecho. Una nueva visión después de la publicación de las leyes sobre parejas estables*. Tirant lo Blanch, Monografías, Valencia.

- DE BUSTOS GÓMEZ-RICO, M. (1997): «Las relaciones personales y económicas entre los integrantes de las uniones de hecho y frente a terceros», en *Consecuencias jurídicas de las uniones de hecho, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ*, núm. 20.
- DE PORRES ORTÍZ DE URBINA, E. (2002): «Uniones de hecho», *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm.14.
- DEL OLMO GUARIDO, N. (2000): «La atribución judicial de la vivienda familiar en los supuestos de ruptura de las uniones de hecho», *Revista de Derecho Privado, Febrero*, Madrid.
- DURÁN Y LALAGUNA, P. (1994): «Notas sobre la igualdad» en *Anuario de Filosofía del Derecho XI*.
- ESPADA MALLORQUIN, S. (2007): *Los derechos sucesorios de las parejas de hecho*, Ed. Thomson Civitas, Pamplona.
- EZQUERRA UBERO, J.J. y LÁZARO GONZALEZ, I.U. (2007): *Las parejas de hecho como sujeto de las políticas familiares en la España de las autonomías*. Informes. Economía y Sociedad. Fundación BBVA.
- FERNANDO ARRAU, C. (2004): Aspectos patrimoniales en las normativas sobre parejas de hecho. Legislación comparada: España, Francia y Suecia. DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS AÑO XIV, N° 292, *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones*, abril 2004 en http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/estudios_pdf_estudios/nro292.pdf
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, I. (1995): *Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales*, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España-Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1995.
- GARCIA HERVÁS, (2001): «Panorámica legislativa sobre uniones de hecho» en *IC*, vol. XLI, nº 81.
- GARCIA POSADA, E. (2003): «El concepto de convivencia no matrimonial en Derecho español», *Anuario de Derecho Civil*, t. LVI, fascículo III, julio-septiembre.
- GARCIA RUBIO, M. P. (2005): «Parejas de hecho y lealtad constitucional» en *Estudios de Derecho Civil: homenaje al profesor Francisco Javier Serrano García*, coord. TORRES GARCIA, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- GAVIDIA SANCHEZ, J. V. (1999): «¿Es la unión libre una situación análoga al matrimonio?», *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 32.
- GUISÁN E. (1987): «Igualdad, imparcialidad y bienestar en la ética contemporánea» en *Anuario de Filosofía del Derecho*, Tomo IV, Madrid.
- GÓMEZ CALLE, E. (2003): «La ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid», *Anuario de Derecho Civil*, t. LVI, fascículo II, abril-junio.

- LACRUZ BERDEJO, J. L. (1997): *Elementos de Derecho civil, IV, Derecho de Familia*, Barcelona.
- LÓPEZ AZCONA, A. (2002): *Aspectos jurídicos de las rupturas de las parejas de hecho*, Ed. Aranzadi, Pamplona. Vid. también en Duodécimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, en http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n000991_parejas%20de%20hecho.pdf
- PEREZ LUÑO, A. E. (1987): *Sobre la igualdad en la Constitución española*, Anuario de Filosofía del Derecho, IV.
- PINTO ANDRADE, C. (2008): *Efectos patrimoniales tras la ruptura de las parejas de hecho*. Ed. Bosch. Barcelona.
- LLAMAZARES, D. (1995): *El sistema matrimonial español. Matrimonio civil, matrimonio religioso y matrimonio de hecho*, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de Madrid.
- MARTINEZ J. I. (1991): «El principio de igualdad y la producción de diferencias en el derecho», en AAVV *El principio de igualdad en la Constitución española*, IX Jornadas de Estudio del Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, del Ministerio de Justicia, Madrid.
- MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C. (1999): «Las uniones de hecho: Derecho aplicable», *Actualidad Civil* 1999-4.
- «Acuerdos entre convivientes more uxorio» (2001): en *Revista de Derecho Privado*. Noviembre
- MARTINEZ DE MORENTÍN, M^a. L. (2003): «Las uniones de hecho o la aversión a determinadas normas jurídicas», *Actualidad Civil*, noviembre, nº 42.
- MERINO GUTIÉRREZ, A. (1988): «Las uniones libres y su perspectiva actual (las parejas no casadas)», *La Ley*, 1988-1.
- MERINO HERNÁNDEZ, J. L. (2000): *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, dtres. Manuel Albadalejo y Silvia, T XXIII, vol. I, Edersa, Madrid, 2^a Ed.
- MESA MARRERO, C. (2000): *Las uniones de hecho. Análisis de las relaciones económicas y sus efectos*, Editorial Aranzadi, Pamplona.
- ORTUÑO MUÑOZ, P. y VEGA SALA, F. (2005): «Derecho civil. Constitución de la pareja de hecho» en Estudio comparado de la regulación autonómica de parejas de hecho: soluciones armonizadoras, Manuales de Formación Continuada, núm. 28, CGPJ, Madrid.
- PEREZ LUÑO, A. E. (1987): *Sobre la igualdad en la Constitución española*, Anuario de Filosofía del Derecho, IV.
- PEREZ VILLALOBOS, M.C. (2008): *Las Leyes autonómicas reguladoras de las parejas de hecho*, Ed. Aranzadi, S.A.

- REINA, V. MARTINELL, J.M. (1996): *Las uniones matrimoniales de hecho*. Marcial Pons, Madrid 1996.
- ROCA TRÍAS E. (1999): «El nou Pret català sobre la família», *Revista Jurídica de Catalunya*, vol I.
- «Repensar la pareja de hecho» en *Estudio comparado de la regulación autonómica de las parejas de hecho: soluciones armonizadoras*, (2005), Manuales de formación continuada, núm. 28, Escuela Jurídica del Consejo del Poder Judicial, Madrid.
 - «El régimen económico de las parejas de hecho», (1995), en *Las uniones de hecho*, coord. M^a Paz Sánchez González, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz-Departamento de la Mujer del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Cádiz.
- SANCHEZ ARISTI, R. (2003): *Dos alternativas a la sucesión testamentaria: pactos sucesorios y contratos post-mortem*, Colección de Estudios de Derecho Privado, núm. 32, Ed. Comares, Granada.
- TORRES LANA, J. A. (1988): «Relaciones patrimoniales a la conclusión de la convivencia *more uxorio*», en *Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo*, vol. V, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España-Consejo General del Notariado, Madrid.
- «De nuevo sobre las relaciones patrimoniales entre parejas no casadas» (1993), *Aranzadi Civil*, 1993-II, pp. 2417-2418.
- CORRAL GIJÓN, M.C. (2001): «Las uniones de hecho y sus efectos patrimoniales (Parte segunda: Efectos patrimoniales)», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 664
- VIDAL MARTÍNEZ, J. (1986): «Aplicación del régimen de sociedad de gananciales a una relación y convivencia no matrimonial. Convenio económico. Validez», *Revista General del Derecho*, núms. 505-506, pp. 4307-4314.
- VIÑAS MAESTRE, D. (2007): Uniones estables de pareja. Regulación procesal y uso del domicilio. *Revista Indret, Revista para el Análisis del Derecho*, Enero, Barcelona.